

La renovación de la licencia de Garoña 'dejaría' 400 millones en la provincia

Monocultivo económico. El Valle de Tobalina vive pendiente de la decisión que pueda tomar el Ejecutivo de Zapatero si el CSN avala la continuidad de la planta. La fecha tope, el 5 de julio

Álvaro Melcón / Garoña

La comparativa de las cifras de desempleo del mes de febrero contenía un dato que algunos consideraron erróneo: mientras en toda España la espiral de destrucción de puestos de trabajo continúa girando, resulta que en Miranda hay menos parados. ¿Por qué? Sencillo, la central nuclear de Santa María de Garoña comenzaba el lunes la parada de recarga de combustible.

Ese proceso no es sólo una de las operaciones industriales más complejas y estudiadas de España, también es un motor de generación de puestos de trabajo que no tiene parangón en la provincia de Burgos y que, cada dos años, emplea a más de un millar de personas a través de cien empresas que se suman a las 500 que ya trabajan de forma habitual en la central. Trespaderne, Oña, Quintana Martín Galíndez, Medina de Pomar... En toda la comarca saben que en aquella tierra, tan arrebatadora como yerma, existe un monocultivo económico: la energía nuclear que emana del reactor de la central.

El maremagnum de cifras que se mueven en torno a la planta es inabarcable, pero hay unas cuantas que definen qué es lo que está en juego con la solicitud de renovación de la licencia encima de la mesa. Operar 10 años más, que es el periodo por el que se renuevan las licencias en España, la industria de Nuclenor (Endesa e Iberdrola al 50%) «supondría la producción de 38.000 millones de kilovatios/hora, es decir, energía equivalente al 14% del consumo eléctrico anual o a 25 millones de barriles de petróleo. En términos medioambientales, evitaría la emisión a la atmósfera de 25 millones de toneladas de CO2».

Eso ya lo sabe el Gobierno porque forma parte del informe aireado por Nuclenor en enero que defiende la operatividad de la central a largo plazo. Pero, bajando a la arena, el asunto cobra dimensiones humanas. En el último año, el impacto directo de Santa María de Garoña sobre la economía burgalesa, en concepto de impuestos, generación y mantenimiento de empleo y contratación de servicios, fue de 36 millones de euros, sin computar otros conceptos como el turismo inducido que lleva a miles de visitantes cada año a la central o que satura los alojamientos del valle durante los trabajos bianuales de recarga. El 90% de sus empleados proceden de un espacio geográfico cuyo radio no es superior a los 30 kilómetros. Esas cifras convierten a Nuclenor en una de las 20 empresas más importantes de Castilla y León y la más relevante en el Norte de la provincia de Burgos.

Contemplando el incremento de este capítulo que, año tras año, se ha venido registrando, la empresa propietaria cifra en «400 millones de euros» la cosecha de capital que recogerá el Valle de Tobalina si Nuclenor obtiene licencia para operar la central diez años más, en palabras de Antonio Cornadó, director de comunicación de la firma energética.

«Un ejemplo de lo que supone la central en el Valle es esta parada, que aunque técnicamente dura un mes, supone mucho más trabajo. Más del 90% de las personas que vienen durante ese tiempo llega a través de los ayuntamientos de la zona. Aquí se requiere mano de obra muy especializada, pero también personal que, a través de las empresas y tras recibir los cursos en el Instituto Técnico de Miranda, hacen trabajos menos



El 90% de los empleados de la central proviene de un radio de 30 kilómetros. Convivir con la seguridad nuclear es algo cotidiano.

Jesús Javier Matías

específicos y, por supuesto, también empleamos a personas sin cualificación técnica, como los agricultores, que en esta época del año tienen poco trabajo, para ayudar en tareas de apoyo», continúa Cornadó.

Tendencia global

Sobre el futuro de todo eso tendrá que decidir el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a través de un informe técnico que ha de presentar al Ministerio de Industria antes del 5 de junio, un mes antes de que expire la licencia actual de funcionamiento. Si el CSN dice que la planta no es segura o no puede generar energía con absolutas garantías se decretará su cierre de forma fulminante.

Si, por el contrario, el CSN dice que la central está en condiciones óptimas de funcionamiento, entonces la decisión la tendrá que tomar el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que primero incluyó el cierre de la central en su programa electoral y que ahora se enfrenta a la coyuntura de quedarse solo en medio del revival nuclear mundial que ha propiciado que incluso Italia, el país antinuclear por excelencia, haya anunciado hace apenas quince días un acuerdo con Francia para desarrollar esta industria. Empujados por el déficit energético y el imparable incremento de la demanda, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Suiza, Suecia, Japón, China, Finlandia y Rusia, entre otros, ya han dicho que construirán nuevas centrales.

Pero esa determinación es algo más que un asunto económico. Garoña es ahora la piedra de toque y el proceso al que se enfrenta es único en la historia de España puesto que la decisión gubernamental, en el supuesto de que el CSN informe favorablemente, marcará mucho más que el futuro de la instalación. Será un manifiesto de intenciones que dirimirá la política energética de todo el país.

«Es trascendental porque nos dirá cuál va a ser el futuro energético del país ya que se va a decidir sobre una instalación que ha demostrado a nivel internacional que es fiable. En España existe toda una industria alrededor de la energía nuclear que, lógicamente, tiene un peso específico. Por ese motivo la renovación supondría un paso más hacia el mantenimiento de toda esa industria y hacia la convergencia internacional en política energética. Lo que no hagamos nosotros lo harán otros países», analiza José Ramón Torralbo, director de la central burgalesa.

«Lo harán otros». Lo cierto es que otros ya lo están haciendo pero en España continúa vigente la moratoria nuclear de Felipe González, que el propio ex presidente ha considerado a posteriori el «mayor error político» de su carrera. El aplazamiento abortó los proyectos de las centrales de Lemóniz I y II (Vizcaya), Valdecaballeros I y II (Badajoz), Trillo II (Guadalajara), Escatrón I y II (Zaragoza), Santillán (Cantabria), Regodola (Lugo) y Sayago (Zamora).

Esa política ha tenido un efecto sobre los que ya estaban y, como es el caso de Santa María de Garoña, se han realizado multimillonarias inversiones en prolongar el ciclo de vida útil de las plantas premoratoria. El pasado lunes se cumplieron 38 años desde que la central burgalesa comenzara a incorporar electricidad a la red eléctrica nacional. En ese tiempo, 370 millones de euros han servido para cambiar más del 50% de los componentes de la planta y adaptarla a la tecnología del siglo XXI.

La cuestión ahora es si existen motivos para decretar un cierre político en el caso, muy probable, de que el Consejo de Seguridad Nuclear diga que la clausura técnica no procede. La respuesta, en breve.